

LA PROFESIÓN DE HISTORIADOR EN LA ESPAÑA FRANQUISTA¹

Gonzalo PASAMAR ALZURIA

Suele ser frecuente recordar que el examen de las manifestaciones culturales ayuda a enriquecer la historia social; y quizá haya llegado el momento de aplicarnos esta premisa a nosotros mismos, a los historiadores y a la historiografía. A fin de cuentas en el ámbito docente e investigador en el que nos desenvolvemos todos, nuestro interés, pasión o dedicación a la Historia aparecen adornados de diversos ropajes culturales. Éstos aluden a unas prácticas, espacios, lenguajes, criterios de autoridad e, incluso, símbolos, que asumimos habitualmente en una mezcla de actitud crítica, curiosidad, obligación, hábito y comparación con la actualidad. Dichos elementos nos ponen en contacto con lo que ciertos especialistas denominan “el ecúmene del historiador” (Karl-Dietrich Erdmann), su particular “universo”. Son unos rasgos que han surgido en el XIX en el mundo germano y en Francia fundamentalmente; han pasado en el XX a todos los países; han experimentado las influencias de los grandes debates intelectuales y políticos, y los efectos de las guerras mundiales, y han acabado por configurar los componentes de una historiografía internacional cada vez más intrincada, con múltiples variedades o rasgos específicos nacionales.

El título de esta Conferencia nos transporta a un aspecto concreto de nuestra historiografía: los rasgos socio-culturales de la profesión de historiador en la España de la autarquía franquista. El objetivo consiste en responder a una cuestión básica que se adivina en el propio título: ¿Cómo pudo “sobrevivir” en la España del nacionalcatolicismo, en los años cuarenta y cincuenta, la profesión de historiador, una actividad iniciada en nuestro país a finales del siglo pasado con la pretensión de aunar la independencia investigadora —la “libertad de cátedra”— con unas mínimas

¹ Conferencia pronunciada el 10 de diciembre de 1998.

preocupaciones por el presente? Planteado de otro modo, ¿hasta qué punto fue compatible el quehacer de los historiadores profesionales con un régimen político nacido de una guerra civil, legitimado con una “épica histórica” procedente de aquélla, el cual ha reprimido sistemáticamente el ejercicio de las libertades públicas y, en particular, la de expresión?

Hemos de comenzar por dibujar o, por así decirlo, congelar la imagen de la historiografía española en el mismo año en que estalla la Guerra Civil. Asistimos de ese modo a un panorama —el de las primeras décadas del XX— del que nos han quedado muchas alusiones aisladas y escasas visiones de conjunto realizadas por sus autores. La razón resulta evidente: la contienda de 1936-1939 y lo que ocurrió después provocó un auténtico trauma entre los historiadores españoles. Los más comprometidos con el franquismo relegaron cualquier tipo de alusión al período anterior salvo para secundar la propaganda de dicho Régimen sobre la existencia de *Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza*, título de un delirante libro publicado en 1940 (San Sebastián, Editorial Española), escrito por profesores universitarios de la plena confianza del Ministerio de Educación Nacional. Los historiadores franquistas, para su consumo interno, no necesitaban establecer una genealogía de la profesión española desde sus inicios. Excepcionalmente allí donde lo hicieron, como en el Prólogo de Alfonso García Gallo al volumen I de las *Obras de Hinojosa*, que ofrece un repaso de los historiadores del Derecho, se puede observar que ni siquiera la memoria de los profesionales se vio libre del clima ideológico de aquellos años.

El golpe de Estado franquista aconteció en plenas vacaciones escolares cuando algunos profesores se hallaban en las universidades de Verano de Santander y de Jaca (Huesca) (en este último caso, las actividades prosiguieron en los días sucesivos al golpe militar, pero a la conclusión de las mismas fue disuelta dicha universidad). La actividad historiográfica española, como veremos, sufrió a partir de ese momento una paralización casi total. Se trataba de una historiografía que todavía conservaba muchas de las marcas de identidad de nacimiento; y cuyas características podríamos sintetizar en estos puntos:

1º) Estaba formada por un reducido grupo de catedráticos universitarios con algún compañero de viaje catedrático de bachillerato (entre los que sobresalía sin duda Pedro Aguado Bleye, profesor del Instituto-Escuela de Madrid en vísperas de la Guerra, afamado autor de manuales y especialista en Historia antigua), además de los más importantes jefes de los archivos históricos. Se trataba de un contingente que en total, añadidos sus más inmediatos ayudantes, no llegaría al centenar. La estabilidad profesional e importancia intelectual —en representación del estudio y la erudición históricas— transformaba a la mayoría de estos autores en auténticos notables nacionales y locales.

2º) Las características intelectuales que los identificaban se podrían reducir esencialmente a dos: de un lado, un interés por la investigación histórica globalmente marcado todavía por algunos rasgos de la reflexión política de fin de siglo y, en particular, por la defensa de una historia nacional española libre de leyendas y apriorismos, y capaz de examinar los aspectos de la “civilización española” o de la “historia interna”. Y de otro lado —sin contradicción con lo anterior—, una extremada confianza en el “método histórico”, así como en un pragmatismo científico ajeno a cualquier debate filosófico. Rafael Altamira, el que más reflexionó sobre estas cuestiones, resumió esa convicción escribiendo que “lo esencial es que el conocimiento histórico (...) pueda alcanzar aquellas cualidades de verdad, certeza y evidencia que separan el conocer científico del vulgar”².

Estos historiadores pertenecieron a generaciones representativas de lo que se ha llamado —no sin cierto equívoco— “positivismo histórico”. Para ellos cualquier principio de clasificación que no emanase en la práctica del esfuerzo interpretativo con las propias fuentes era, ni más ni menos, una peligrosa vuelta a viejas formas de entender el oficio subsumidas en los moldes de la metafísica, del diletantismo o del arte de la elocuencia. No obstante, desde finales de los años veinte habían aparecido en el vocabulario de los autores españoles expresiones como “síntesis histórica” o “historia de la cultura”, que a más de influencias de la historiografía europea, indicaban un creciente interés por las visiones históricas globales.

3º) Fueron cultivadores de especialidades de gran prestigio y tradición, pero se mostraron relativamente indiferentes o ignorantes de la moderna historia económica y social que comenzaba a aparecer en los foros internacionales. El madrileño Centro de Estudios Históricos (fundado en la Junta para Ampliación de Estudios [JAE] en 1910) representó el núcleo de una “comunidad científica” que creía confiada abarcar ese horizonte de la historia de la “civilización española” con tres especialidades esenciales, entendidas en un sentido amplio y solidario: la historia artística y arqueológica, la filología y la historia institucional. Por las descripciones que nos han transmitido ciertos escritores que frecuentaron aquel Centro, sus principales mentores, hombres de diversa ideología política como Claudio Sánchez Albornoz, Manuel Gómez Moreno o Ramón Menéndez Pidal, compartían físicamente el espacio de lo que había sido un pequeño hotel situado en el corazón de la capital. Allí dirigían investigaciones, excursiones científicas, revistas especializadas —la JAE nunca apadrinó una revista de Historia general—, e incluso establecían contactos con hispanistas e investigadores extranjeros. El resultado avalaba la impresión, recogida en una ocasión por

² Rafael Altamira, *Cuestiones modernas de Historia*, Madrid, Aguilar, 1935, p. 147.

Jaime Vicens Vives, de que “en 1936 la investigación histórica española se hallaba en una situación pujante; no tan considerable como la alcanzada por otros países europeos con más larga tradición científica, pero en trance de equipararse rápidamente con ellos”³.

4º) La inexistencia de rupturas y debates importantes y la singularidad de la historiografía catalana:

La construcción del mencionado marco científico nunca fue visto —salvo excepciones— como un desafío a la preeminencia intelectual y social de la Academia de la Historia. Ésta, que se hacía acompañar de la imagen de “asamblea de selectos”, era la tradicional depositaria de los hábitos del erudito y del historiador escritor polifacético propios del siglo XIX. Los nuevos historiadores universitarios nunca rechazaron el papel de esta corporación —más bien al contrario— ni dudaron en absoluto de la legitimidad de la “historia externa” o narración de hechos políticos y militares, cuyas manifestaciones solían ser la ocupación de los más notorios políticos y militares que ocupaban los sillones académicos. Como escribía también Rafael Altamira, “en una historia general no puede suprimirse la historia política (...) hay que dar a esta parte de la historia un lugar propio y adecuado a su importancia, pero a condición de estudiarla conforme al proceso natural de su formación, es decir, empezando por su aspecto interno”⁴.

Sin embargo, conviene advertir que en este panorama la historiografía catalana tenía unos rasgos singulares y mantenía unas relaciones relativamente tensas con el núcleo madrileño. Dotada de centros propios que giraban en torno al *Institut d'Estudis Catalans* (1907) y la universidad de Barcelona de los años treinta (regentada por el arqueólogo e intelectual Pere Bosch-Gimpera en régimen de autonomía), aquella historiografía había estrechado sus relaciones con el catalanismo y adquirido un rango universitario específico. Además, poseía sus propios contactos con el extranjero (por ejemplo, a través de los Congresos Internacionales de Ciencias Históricas, de los que eran miembros permanentes Ferran Soldevila y Nicolau D'Olwer). Así los más activos y comprometidos historiadores del Principado no dudaban en considerarse miembros de un grupo científico con un tinte político definido: la “escuela catalana” (la noción se mantendría incluso en los peores años de la posguerra).

5º) Toda esta pujanza investigadora no guardaba proporción con la menguada dimensión divulgativa y asociativa de aquella historiografía. La

³ Jaime Vicens Vives, *Obra dispersa*, Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1967, vol. I, p. 15.

⁴ Rafael Altamira, *La enseñanza de la Historia*, Madrid, Victoriano Suárez, 1895, p. 195.

historia contemporánea recibía una escasa atención y sólo era valorada por autores aislados como el mencionado Rafael Altamira, quien ingresó en la Academia de la Historia con un discurso titulado “Valor social del conocimiento histórico” (1922); o por el publicista catalán Antoni Rovira i Virgili, creador de opinión más que historiador profesional, quien defendía la tesis de Benedetto Croce de que la “historia se interpreta desde el presente”.

La profesión española se caracterizaba por su extremada “resistencia a considerar materia historiable aquella que utilizaba como fuentes no viejos pergaminos ni añejos documentos manuscritos, sino libros, revistas y periódicos”⁵. Las reflexiones sobre el concepto de “nación española” o sobre la “psicología nacional”, de procedencia decimonónica, eran asimismo fuente de prejuicios sobre la valoración de la historia contemporánea. No obstante, puede ser un síntoma de que las cosas llevaban signos de cambiar las dos obras enciclopédicas publicadas por la Casa Editorial Gallach de Barcelona, en los años treinta: *La Historia Universal (Novísimo estudio de la Humanidad)* y la *Historia de España (gran historia general de los pueblos hispánicos)*, con diversos capítulos dedicados a la historia contemporánea, donde escribían, entre otros, José Deleito Piñuela, Luis Pericot o Manuel Reventós Bordoy. A pesar de este dato, en 1936 en la profesión histórica española todavía existía una escasa diferenciación entre el oficio de historiador y la tarea del erudito. Las consecuencias eran que todavía no se contaba con una revista de Historia, representativa del gremio como tal, ni con modernas asociaciones de historiadores a imagen de las existentes en Francia, Gran Bretaña o Italia.

Con este panorama, los tres años de guerra civil y los más de diez en los que ejerció su cargo de ministro de Educación Nacional el antiguo cedita, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y admirador de Felipe II, José Ibáñez Martín (1939-1951), acarrearón unas consecuencias de muy largo alcance en la historiografía española. Por descontado quedó borrado durante un par de décadas al menos todo el lustre científico que había adquirido dicha historiografía hasta 1936, o estaba en trance de conseguir. Pero quizá no fuese ésta la mayor repercusión. Hubo algo más. Se produjo una redistribución de personal, un acomodamiento, y un repliegue intelectual y autocensura —en algunos casos un “exilio interior”— que impidieron durante todo ese tiempo que echase a andar el espíritu asociativo de los historiadores como tales —como estudiosos distintos de los eruditos—. A largo plazo nadie pudo evitar que las viejas formas de enten-

⁵ José María Jover, “El siglo XIX en la historiografía española contemporánea (1939-72)”. *España. Doce Estudios*, Barcelona, Planeta, 1974, p. 17.

der el historiador y la Historia entrasen en declive en los años sesenta. Pero el sentido “oficialista” de los más inquietos autores, esto es, el cobijo bajo las instituciones e iniciativas oficiales, y la desconfianza hacia quienes buscaban otras vías se han prolongado en España hasta más allá de esa década incluso.

Entre tanto la Guerra Civil dispersó el gremio de los historiadores españoles. El primero de sus efectos en este terreno fue el exilio de un contingente que, sumamos los entonces reconocidos, sus discípulos y ciertos profesores, rondaría las dos decenas y media de personas⁶. En este grupo, además, figuraron algunos de los más importantes especialistas y cabezas de la profesión. Ése fue el caso de Pere Bosch-Gimpera, Conseller de Justicia de la Generalitat desde 1937, quien fue separado de la cátedra y condenado a muerte por el régimen franquista, instalándose en México a comienzos de los cuarenta; o de Claudio Sánchez Albornoz, sorprendido por el estallido de la Guerra en Lisboa en el cargo de embajador de la República, también separado de la universidad y exiliado en Buenos Aires; o el de Rafael Altamira, quien dejó España en julio de 1936 amparado en su inmunidad diplomática como miembro del Tribunal Internacional de La Haya, y fijó su residencia también en México a finales de 1944. Añádase a éstos otros historiadores relevantes como Américo Castro, José María Ots Capdequí o Agustín Millares Carlo. Todos ellos pasaron de ser personalidades con un sólido puesto en la vida intelectual y académica española, y rodeadas de todos los honores (por supuesto, miembros de la Academia de la Historia), a convertirse en modestos profesores contratados en centros universitarios en sus respectivos lugares de exilio. Rodeados de numerosas dificultades económicas, pese a su prestigio se vieron obligados a partir casi de cero. El fallecimiento de Altamira en 1951, en México, sólo mereció, por ejemplo, una breve reseña de “cortesía” en el *Boletín de la Real Academia de la Historia* (t. 129, 1951, pp. 7-9) redactada por el duque de Alba, director de la corporación, quien mantenía una vieja amistad con el historiador y podía permitirse cierta independencia de criterio.

Los quehaceres habituales de la universidad se paralizaron prácticamente durante la Guerra (a excepción de la universidad de Barcelona). En el Madrid sitiado objeto de los bombardeos del ejército franquista y del control de las organizaciones del Frente Popular, el Centro de Estudios His-

⁶ Javier Malagón, en “Los historiadores y la Historia en el exilio” (J. L. Abellán (dir.), *El exilio español de 1939*, vol. V, Madrid, Taurus, 1978, pp. 245-353), cita más de ciento veinte autores, pero incluye también a todos los que se convirtieron en historiadores en el exilio y a todos los que escribieron ocasionalmente alguna obra de historia en el propio exilio.

tóricos abandonó todas sus actividades, cerró sus puertas y quedó bajo la custodia del arqueólogo y especialista en Historia antigua, Antonio García Bellido. En ninguna parte, salvo en el caso catalán, se iniciaron las clases universitarias en el otoño de 1936. Un buen número de los jóvenes de clase media que en aquel verano preparaban oposiciones y tesis doctorales, acabaron cogiendo el fusil, bien enrolados en los ejércitos franquistas, bien en el de la República. La más frecuente dedicación intelectual e historiográfica de esos jóvenes, estudiantes y profesores fueron las colaboraciones propagandísticas de algunos en diarios y revistas de la Falange Unificada. A veces no eran tan jóvenes, como el catedrático de Historia de España de la universidad de Madrid e historiador consagrado, Antonio Ballesteros Beretta, quien participó de buen grado en la *Historia de la revolución nacional española* publicada en París en 1939-1940 a instancias del Ministerio de Educación Nacional. Hubo historiadores reconocidos que fallecieron en la Guerra. Tales fueron los casos del profesor de Derecho Román Riaza; los discípulos de Ballesteros, Claudio Galindo Guijarro y Julián María Rubio; el reputado helenista catalán, Lluís Segalà, que murió en Barcelona en un bombardeo; o el Padre Zacarías García Villada, colaborador habitual del Centro de Estudios Históricos en los años veinte, y que escribió un libro propagandístico, en favor de los sublevados, titulado *El Destino de España en la Historia Universal* (1936), considerado la causa de su asesinato en un “paseo” en la carretera de Vicálvaro.

Tan o más significativo que el cercenamiento de la propia comunidad historiográfica fue la intervención gubernativa en la misma, ya iniciada por la Junta Técnica de Estado durante la contienda, y que revistió varias formas:

La primera y una de las que más amargaron la vida de muchas personas, fue, sin duda, la “depuración” de profesores. Tras el pronunciamiento militar, los gobiernos de la República y de la Generalitat se apresuraron a decretar la “separación definitiva”, en las universidades de Valencia y Barcelona, de ciertas personas que habían colaborado con los sediciosos; en este caso, historiadores como el marqués de Lozoya, conocido dirigente de la CEDA, o Antonio de la Torre, catedrático de Barcelona, anticatalanista huido de la Ciudad Condal y que pasó al bando franquista. Por su parte, el proceso de depuración desencadenado por el franquismo fue mucho más amplio y prolongado en el tiempo. Dejando a un lado a los más furibundos franquistas —algunos incluso consideraban la depuración propia como un rasgo de lealtad política—, el fenómeno se vivió, ya en la posguerra, con una mezcla de humillación, temor e impotencia ante la extrema arbitrariedad administrativa. No faltó también el miedo a las delaciones, a las falsas denuncias y al espíritu de revancha. El historiador aragonés José Camón Aznar, discípulo “emancipado” de Manuel Gómez

Moreno, y de ideas liberales, plasmó en su autobiografía esos sentimientos con estas palabras:

“Marché a Vitoria para resolver el expediente de depuración. Nombre repugnante. Presenté mis descargos. Regresé a Zaragoza y al no tener noticias de su resolución volví a Vitoria. El expediente había desaparecido con toda la documentación. Parece que en ese Ministerio eso era frecuente. Lo rehíce y esperé. Como director de universidades estaba un fanático que odiaba a los catedráticos liberales (...) pude reingresar en la universidad (...) pero con la sanción de traslado”⁷.

Otra manifestación de la intervención gubernativa fue la creación en 1940 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en sustitución de la JAE, del Centro de Estudios Históricos y de otros organismos anteriores.

En esta iniciativa, como ha recordado Pedro Laín Entralgo en su *Descargo de Conciencia*, el ministro Ibáñez Martín prefirió nombrar directores de los Institutos y Centros a profesores de reconocida tendencia derechista, llegados a Madrid o a Barcelona o de plena confianza en otras universidades. Evitó así ratificar a los habituales de la JAE, y cabezas del Centro de Estudios Históricos, que venían acompañados de la fama de “liberales” (aunque hubieran hecho declaración pública de acatamiento al franquismo). Quedaron marginados o en segundo plano Ramón Menéndez Pidal, Manuel Gómez Moreno o Antonio García Bellido, y el control de los Institutos de Historia pasó a historiadores de “segunda fila”, una pléyade de viejos y notorios conservadores, muy poco relacionados con los suprimidos Centro de Estudios Históricos y JAE. Entre todos los encargados de “controlar” las cátedras de Historia de posguerra se contaron: el ex-maurista Pío Zabala, rector de la universidad Central, amigo personal de Franco y autor del tomo de *Historia contemporánea* (1930), continuación de la *Historia de España y de la civilización española* de Altamira; el menendezpelayista y polifacético Eloy Bullón, retirado de la política conservadora desde el golpe de Estado de Primo de Rivera y respaldado por su fama de conferenciante; el erudito medievalista Antonio de la Torre, ya mencionado; el antiguo monárquico y tradicionalista Antonio Ballesteros Beretta, también citado, redactor de una *Historia de España* de carácter enciclopédico, medievalista y convertido en americanista; o el septuagenario Miguel Asín y Palacios, que había sido un conciencizado investigador de la historia intelectual del

⁷ José Camón Aznar, *Perfil autobiográfico*, Zaragoza, Museo e Instituto Camón Aznar, 1984, p. 36.

Islam y representaba la llamada “escuela de los arabistas”. No puede dejarse de aludir, además, al orondo Cayetano Alcázar conocedor de los ministros y los virreyes del siglo XVIII; al refinado marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, ni al rector vallisoletano y arqueólogo formado en el Centro de Estudios Históricos, el “ágrafo” Cayetano Mergelina. Otros profesores de menor peso específico en el organigrama del Consejo, algunos incluso de viejas simpatías liberales, se cobijaron en el mismo con la ingenua esperanza de que el panorama español recuperaría en breve el pulso de la investigación científica.

Los concursos de traslado y la convocatoria de oposiciones a cátedras de universidad, durante los años cuarenta, fueron otra importante muestra de la intervención gubernativa. Se rigieron por tribunales cuyos miembros eran elegidos por el ministro, y de sus candidatos se exigía la expresa adhesión al “Movimiento nacional” o, en su caso, el haber sido “convenientemente depurados” —lo que impedía ejercer el “traslado” a todos aquellos que no lo hubieran sido—. A lo largo de la década siguiente, el clima de las oposiciones, al menos entre los historiadores, iniciaría un lento pero perceptible cambio ayudado de factores como el haberse relajado el marcaje sobre las mismas con el nuevo ministro Joaquín Ruiz Giménez; o el haber quedado atrás la depuración, lo que a su vez permitía la presencia de historiadores antes vetados o marginados como Jesús Pabón, Luis García de Valdeavellano o Antonio García Bellido.

Entretanto los efectos del sistema de oposiciones “patrióticas” se extendieron mucho más allá. Convirtieron “el acceso al escalafón” en un terreno de luchas subterráneas donde se combinaban los “currícula” docentes e investigadores, bien respaldados en la enumeración de los servicios al nuevo Estado —incluso en el dudoso mérito de haber sido depurado por la República—, con las “recomendaciones” ante los historiadores más allegados al ministro Ibáñez Martín. Todo esto aconteció en medio de las maniobras de los sectores católicos representados por el Opus Dei, destinadas a sacar adelante a sus candidatos y dejar en evidencia, si era posible, al candidato contrario.

Si a esas oposiciones añadimos, entre 1936 y los primeros cuarenta, las jubilaciones de un cuerpo de catedráticos —que presentaba un acusado aire gerontocrático— y un imprescindible proceso de ampliación de puestos docentes universitarios, el resultado fue una hornada de nuevos catedráticos historiadores (los “catedráticos de provincia” como los bautizó Florentino Pérez Embid), que han tenido una enorme trascendencia en la historiografía española en las últimas décadas. A sus jubilaciones hemos estado asistiendo a lo largo de los años setenta y ochenta: los Rodríguez Casado, Pérez Embid, Palacio Atard, Ruméu de Armas, Gil Munilla, Palo-

meque Torres, Martín Almagro; franquistas convencidos por aquel entonces que apenas variaron después su orientación política.

Antes de hacer referencia a la formación y actividades de este grupo, conviene comparar ese proceso de consolidación con las vicisitudes de aquellos que habían combatido en el ejército republicano sin pasarse al bando franquista, o pertenecido a una familia de adeptos al Régimen de abril de 1931, que vivieron los campos de concentración o arrastraron el estigma de “desafectos”; o simplemente no pudieron exhibir entre sus méritos ningún servicio al nuevo Estado ni tuvieron padrinos influyentes. Con alguna excepción, los más perseverantes o afortunados no comenzarían a consolidarse en la universidad hasta finales de los cincuenta o comienzos de la siguiente década. Historiadores como Joan Reglà, el especialista en arte rupestre Francisco Jordà, o el filólogo helenista y especialista en Historia antigua Luis Gil Fernández, hallaron la acogida y la amistad de catedráticos de orientación liberal (aunque acomodados en las estructuras de la universidad franquista y en el Consejo Superior⁸), quienes les facilitaron la colaboración en este último Centro o la ayuda en una plaza de auxiliar o adjunto de su propia cátedra.

Estas situaciones de acogida ocurrieron con cierta frecuencia. Generalmente no pasaron de ahí. Ser “colaborador” del Consejo o profesor adjunto en la universidad de los cincuenta no eran sinónimo de estabilidad ni prestigio profesional, sino de aislamiento intelectual, agobios económicos y pluriempleo. La universidad franquista todavía conservaba muy marcados ciertos rasgos estructurales y sociológicos del clasismo del siglo XIX. Así, por ejemplo, la presencia de un solo cuerpo de profesores, el escalafón de catedráticos, y la consideración del resto del personal docente a modo de “ayudante” de aquéllos. De la estabilidad y condición de los llamados profesores “adjuntos”, instituidos en 1947, contratados por cuatro años mediante oposición y dependientes del titular de la cátedra, alguien ha comentado con humor que “aquello parecía la Reconquista: se ganaba la plaza, se perdía, se recuperaba y así sucesivamente”⁹. Otras veces lo que se impuso en los años cincuenta fue el “exilio económico” y hasta cierto punto también político. Es conocida, y no infrecuente, la trayectoria de un Rafael Olivar Bertrand (está publicada su correspondencia con Bosch-Gimpera), especialista en biografías de personajes de la historia contemporánea, que ejerció de

⁸ En estos tres casos, los maestros directos y padrinos fueron, respectivamente: Vicens Vives, Luis Pericot y Manuel Fernández Galiano, que impulsaron la investigación, se adaptaron a la universidad franquista y se consolidaron en el Consejo Superior.

⁹ Luis Gil, “Filología helénica e historia crítica del humanismo”, *Anthropos*, 104 (1990), p. 15.

redactor de *Arbor* en los cincuenta, y acabó emigrando a Argentina y a Nueva York, al no hallar salida a su carrera académica.

Una derivación de la mezcla de intervención gubernativa e inestabilidad profesional la reflejó el cuasi-monopolio de las revistas de Historia por parte del Consejo Superior en el período de posguerra: exactamente doce revistas especializadas de estudios históricos y una de Historia general. Esta última, bautizada con el título de *Hispania. Revista Española de Historia*, dirigida por Pío Zabala, Cayetano Alcázar y Antonio de la Torre, nació en 1940, según se decía en su presentación, “con la notabilísima protección de su excelencia el Jefe del Estado y la específicamente valiosa del excelentísimo ministro de Educación Nacional”. Era la primera revista de Historia general surgida dentro del gremio español (descontando, por supuesto, los breves intentos regeneracionistas de comienzos de siglo o publicaciones oficiales de erudición como *Revista de Archivos*, tercera época, o el *Boletín de la Real Academia de la Historia*). En la práctica, *Hispania* resultó un elocuente reflejo de la acartonada vida investigadora de posguerra. Sus reseñas de libros representaron una mezcla de la épica histórica del franquismo y del “positivismo histórico”; y sus artículos de fondo, el trabajo de una galería de becarios, eruditos locales, eclesiásticos, catedráticos de provincias y alguna esporádica colaboración de los principales responsables de la revista.

En ese contexto científico y cultural donde la vida oficial se guiaba por los intentos de asentar el Régimen y la famosa máxima del almirante Carro Blanco, “orden, unidad y aguantar”, el acomodamiento y la mediocridad estaban a la orden del día en el mundo universitario. Ahora bien, excepciones aparte, que los historiadores asentados en aquellos difíciles años tuvieran poco o ningún “brillo” como tales, no significa que no fueran activos en sus propias especialidades cuando era el caso. La principal estructura investigadora desde finales de los cuarenta hasta bien entrados los sesenta, la levantaron y consolidaron todos ellos sirviéndose de la extensión del Consejo Superior en provincias, de sus contactos en la vida local —en particular en las Diputaciones Provinciales— y del aire de respetabilidad social de sus cátedras. Se pueden conceder muchos calificativos, pero desde luego no el de “ociosos”, a autores como el opusdeista Vicente Rodríguez Casado, fundador, entre otras, de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla (1942), de la Universidad Hispanoamericana de La Rábida en Huelva (1943), y de las revistas *Anuario de Estudios Americanos* (1944) y *Estudios Americanos* (1948); o el antiguo miembro del Centro de Estudios Históricos y liberal adaptado al franquismo, José María Lacarra, cabeza del Centro de Estudios Medievales de la universidad de Zaragoza (1942), de la Institución Príncipe de Viana de Pamplona, y de *Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón* (1945); o al falangista y franquista convencido Manuel Ballesteros

Gaibrois, impulsor en Madrid de los Seminarios de Estudios Americanistas y de Estudios Indigenistas, y de las revistas *Trabajos y conferencias* y *Revista Española de Indigenismo*. Algo parecido podemos expresar de los arqueólogos aragoneses Martín Almagro y Antonio Beltrán: el primero, tradicionalista converso, quien se encarga en 1940 de las tareas arqueológicas dejadas por Bosch-Gimpera, funda la revista *Ampurias*, dirige las excavaciones de aquella colonia griega, y apadrina el Instituto de Estudios Turolenses y la revista *Teruel*; y el segundo, franquista pragmático, fundador, a su vez, de los Congresos Arqueológicos del Sudeste Español (nacidos en 1946), y de sus continuadores, los Arqueológicos Nacionales (1949); o el arqueólogo catalán Juan Maluquer de Motes, promotor en la universidad de Salamanca de la revista de prehistoria y arqueología *Zephyrus*. Sin esta clase de iniciativas —todas basadas en el apoyo oficial— no sería posible entender la recuperación y desarrollo tras la Guerra de la investigación en temas de Prehistoria e Historia antigua y medieval. Constituyeron actividades que no se apartaron de los métodos y las divisiones en especialidades ya aceptadas, y que podían soslayar mejor el clima de servilismo ideológico que los estudiosos de la Historia moderna y contemporánea.

A estas generaciones de historiadores que se habían formado en ese “positivismo histórico”, no les quedó otro remedio que dejar de lado los rasgos intelectuales que acompañaban a esa práctica del oficio y que se remontaban a la reflexión historiográfica finisecular. En última instancia la causa de ese cambio procedió de la percepción de las comprometidas vicisitudes por las que atravesaron el Régimen y la población española, entre 1940 y finales de los cincuenta, en el marco internacional y en la vida cotidiana; objeto recurrente, como se sabe, de la propaganda y de la “épica histórica” oficiales. El efecto global fue abundar en un “presentismo histórico” donde las consideraciones políticas se disfrazaban de argumentos filosóficos e intelectuales —más o menos esotéricos— sobre la cultura española y europea, el catolicismo, Hispanomérica, el papel de los intelectuales o el comunismo. Fue un “presentismo” que animó las revistas culturales, creó referencias para los historiadores, pero se materializó poco en el terreno específico de la investigación debido a los condicionamientos profesionales antes explicados.

La militancia nacionalcatólica y la lectura de meditados historiadores y filósofos conservadores europeos, que habían escrito sobre “el destino de Europa” y la “crisis del mundo moderno”, como Paul Hazard, Christopher Dawson, Arnold J. Toynbee, Wilhelm Röpke, Romano Guardini o Hermann Keyserling, incitaron a visiones o consideraciones globales sobre la historia europea, y a la meditación —como lamentaba un joven historiador— sobre la “timidez de la historiografía católica, afanosamente dedicada a reconstruir detalles y hechos aislados, mientras el materialismo dialéc-

tico se lanza a sugestivas visiones de conjunto”¹⁰. Tampoco pasó desapercibida a esa generación de historiadores la activa presencia de intelectuales católicos centroeuropeos acogidos en el Consejo Superior o en el Instituto de Estudios Políticos que huían de los aliados y de sus respectivos países —Hans Juretschke, Georg Uscatescu, Carl Schmitt, o el mexicano Carlos Pereyra, simpatizante del franquismo, y afincado en España desde hacía más de veinte años—. Quienes más provecho sacaron de estas influencias fueron los dedicados a la Historia moderna y contemporánea y nacionalcatólicos militantes. Federico Suárez Verdaguer, catedrático de la universidad de Santiago, lo mostraría con esta elocuente cita:

“A los historiadores de la cultura debe agradecérseles (...), la teoría de lo moderno, elaborada lentamente en los últimos veinticinco o treinta años, y la valoración de lo ideológico en el desenvolvimiento de la vida de los pueblos. Lo primero ha permitido comprender en sus proporciones justas al liberalismo, consecuencia de unos principios que hunden sus raíces inmediatamente en los supuestos ideológicos de la Ilustración y mediatamente, en la Reforma y el humanismo antropológico del Renacimiento. Lo segundo lleva a buscar el sentido de la vida política en los supuestos ideológicos que informan la mentalidad de sus hombres”¹¹.

La misma notoriedad de Ortega y Gasset no fue ajena a esa “transformación” de la cultura histórica. Retornado a la España franquista a través de la frontera portuguesa en el verano de 1945, Ortega se dispondría a reemprender las reflexiones sobre la “historiología”, mezcla de los ecos de Nietzsche, Spengler, Dilthey y Heidegger, esta vez de la mano de un pomposo Instituto de Humanidades (1947). Su tono siguió siendo una ambigüedad despechada hacia la historiografía profesional, susceptible de diversas interpretaciones. Unos podían ver en él una referencia a la distancia entre la historiografía española y europea; los más, una simple baladronada o, incluso, un aliento para crítica de los historiadores liberales anteriores a 1936. No era la primera vez, por supuesto, que Ortega expresaba su convicción de que “historiadores como tales no los ha habido en España y por eso todo nuestro estupendo pasado está por descubrir y analizar (...)

¹⁰ José M. Jover, “Nota bibliográfica de las ‘Actes du Congrès historique du Centenaire de la Révolution de 1848’”, *Arbor*, XVI (junio, 1950), p. 321.

¹¹ Federico Suárez Verdaguer, “Planteamiento ideológico del siglo XIX español”, *Arbor*, 29 (mayo 1948), p. 61.

Nuestra historia está intacta de suerte que siendo la española la realidad más vieja de Occidente, resulta ser la más virgen¹².

El resto de los estímulos de muchos estudiantes, becarios, colaboradores del Consejo y profesores de provincia, vino de las reflexiones sobre la “cultura española” y los intelectuales realizadas por falangistas y menendezpe-layistas universitarios notorios como Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar, Rafael Calvo Serer, Florentino Pérez Embid o Vicente Palacio Atard. Se trataba de un aspecto ligado también al ensayismo histórico de fuera y de dentro. Las obras de este género del propio Laín Entralgo, Gregorio Marañón, o Salvador de Madariaga, Américo Castro, Sánchez Albornoz (estos tres últimos en el exilio) eran reflexiones políticas sobre la historia contemporánea al tiempo que repasos de los grandes acontecimientos y corrientes culturales de la historia española.

La trayectoria de Jaime Vicens Vives en los años cincuenta, sus éxitos y fracasos, corrobora lo hasta aquí comentado. Éste pertenece a esa generación de historiadores asentados en la posguerra que se esforzaron en impulsar la actividad investigadora en una universidad donde se respiraba la tragedia de la Guerra, las consignas y la propaganda oficial; y la mayoría del profesorado se movía entre la desgana y la ausencia de perspectivas. Dinámico, ligado al Consejo Superior, con padrinos como Antonio de la Torre y Cayetano Alcázar; admirador y crítico de Ortega, su llegada a Barcelona en 1948 se produjo en un momento en que “la escuela catalana” estaba literalmente en la clandestinidad. Rovira i Virgili había fallecido en Perpignan en el otoño de 1949; los *Estudis Universitaris Catalans*, conducidos por Miquel Coll i Alentorn y por Ferran Soldevila, eran clandestinos; el *Institut d'Estudis Catalans*, casi; y simpatizantes de la cultura catalana, como Pericot o Ernesto Martínez Ferrando, se habían acomodado al franquismo. Algunas cátedras de Historia de la universidad de Barcelona habían quedado a merced de enemigos del nacionalismo catalán, como Martín Almagro o Ruméu de Armas. Y no digamos en el Consejo en Madrid, donde podemos hallar a Ciriaco Pérez Bustamente y a Carmelo Viñas Mey, adversarios declarados del propio Vicens y de sus obras de Historia. En este contexto hostil Vicens pretendió revivir y renovar la “escuela catalana” desligándola del nacionalismo político. Sus armas fueron la paciencia, la conciencia profesional y divulgativa, y una diplomacia capaz de convencer a otros historiadores de la necesidad de la historia económica y social. Así pudo extender una “red de alianzas”, como lo demuestra su *Historia social y económica de España y América* (1957-1959). Entabló contactos personales y profesio-

¹² Cfr. Gregorio Morán, *El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo*, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 166.

nales con José María Lacarra en Zaragoza, Manuel Ballesteros Gaibrois en Madrid, Guillermo Céspedes del Castillo en Sevilla y, por supuesto, entre algunos profesores de la universidad de Valencia. La fortuna de esa obra, desgraciadamente, no la llegó a contemplar el propio Vicens. Éste falleció en la primavera de 1960 en pleno apogeo investigador y cuando se había convertido en un historiador prestigioso fuera de nuestras fronteras.

Epílogo

En la década de los sesenta los cambios de la sociedad española traídos por el “desarrollismo”, así como las novedades en la cultura universitaria, han provocado el declive del viejo modelo profesional. El proceso, sin embargo, ha sido lento. Los años sesenta y setenta han presenciado la coexistencia de dos grupos de historiadores consolidados. Éstos, en términos generales, han adoptado una actitud distinta ante las novedades de la historiografía internacional. De un lado se sitúan los que habían poseído un peso específico durante la posguerra y, salvo notorias excepciones, han permanecido impermeables a los cambios de la historiografía —o al llegar a los años sesenta vivían la etapa final de su carrera—. De otro lado, se hallan los historiadores asentados desde finales de la década de los cincuenta. Estos últimos, que se han formado en la universidad de posguerra, han sido los discípulos del grupo citado (e incluso de los historiadores exiliados), pero han desarrollado su actividad en unas condiciones distintas que les han obligado o permitido asimilar la importancia de la historia económica y social (sin necesidad de romper con la historia política y narrativa). Estas nuevas condiciones se podrían reducir a las siguientes: primero, un mayor contingente de puestos universitarios y especialidades más definidas; segundo, han contado con la referencia de ciertos historiadores “senior” impulsores de la renovación, como Vicens, Maravall o Valdeavellano; tercero, han disfrutado de una confianza más sólida en las posibilidades de una “normalidad” investigadora; y, finalmente, ya sea por convicción o por necesidad, han hecho gala de una mayor tolerancia hacia las opiniones políticas de sus discípulos, quienes, a su vez, vivían directamente las movilizaciones estudiantiles y despreciaban por absurda la épica histórica franquista. En definitiva, la transición a nuestro actual panorama historiográfico se ha iniciado en los años de la dictadura franquista y ha sido posible a pesar de ella.